

Lugares y espacios para la literatura en la Argentina del XIX. Las bibliotecas populares en los circuitos de la lectura

Javier Planas

Un lector en los llanos

En el noreste argentino, más precisamente en Olta, provincia de La Rioja, un lector escribe en 1872 una de las cartas más significativas que pueden encontrarse en el abundante epistolario recibido por la Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares en los albores de esa década. El remitente extiende una promesa:

A salida del próximo invierno voi á trabajar una casita para establecer mi pequeño comercio, i tengo ofrecido trabajar un piezita cómoda, para que establezcamos una Biblioteca. Quiero, i me consideraré mui honrado el ser suscriptor al Boletín [de las Bibliotecas Populares]. Desde ahora me comprometo hacer esfuerzos inauditos para cumplir con todas las prescripciones de la suscripcion (*Boletín*, 1872, no. 3, p. 215).

José María Navarrete tiene 49 años. Aprendió a “firmarse” a los 25. Es un lector apasionado, romántico. Su historia es un poco la historia de muchas de las bibliotecas populares que se organizaron por aquel entonces en Argentina. Él es uno de esos personajes en los que tanto ha insistido Robert Darnton (2010) al referirse a los intermediarios olvidados de la literatura: fabricantes de papel, tipógrafos, correctores, transportistas, libreros, bibliotecarios y, por supuesto, lectores. Navarrete, como tantos otros hombres y mujeres, tuvo

algo que ver con ese complejo sistema de comunicación de la cultura libresca que actúa en el pasaje del texto al libro y que, también, hace posible la agitación literaria en la vida cotidiana. Sus esperanzas de armar una piecita para instalar una biblioteca nos acerca a uno de los problemas más frecuentes que ese sistema padeció a lo largo del XIX: la constitución de los espacios públicos de lectura y, más allá de ellos, la distribución regional de los impresos. La cuestión fue, desde ya, un inconveniente para todo el lectorado, pero también representó un obstáculo para el proceso de modernización de la cultura nacional que la élite dirigente desarrolló con éxito dispar desde los sesenta (Prieto, 2006). Con todo, el recorte biográfico de nuestro lector nos deja en una encrucijada formada por las políticas de lectura –que la bibliografía académica ha mantenido demasiado tiempo asociada a la historia del aparato educativo y al dispositivo escolar– y la historia de aquellos que hicieron uso de esas medidas para emplazar lugares y espacios para la literatura.

Navarrete describe con tristeza la falta que le hacen los libros desde que llegó a la localidad riojana dos años antes. Tanto extraña esa presencia que lee el *Boletín Oficial* en la comandancia: “este es el único papel público que se ve por aquí”, dice con aire amargo en uno de los tramos de su carta. Con el tiempo se las ingenia para formar un grupito de lectura y pasar algunas tardes siguiendo las noticias de gobierno. Con tamaño entusiasmo y pasión, no podemos dejar de creerle cuando confiesa haber derramado “lágrimas de consuelo” al ver que el Estado nacional daba difusión a una política de fomento a las bibliotecas populares, sancionada como Ley en septiembre de 1870. Las circulares que venían en el *Boletín Oficial* anunciaban la puesta en acto de un sistema de gestación sustentado en las acciones de la sociedad civil. El gobierno ofrecía como estímulo un aporte igual al dinero recolectado por cada asociación, tramitar la inversión de ambas contribuciones en libros y hacer el envío del material sin costo adicional. En este esquema, las bibliotecas conservarían la autonomía administrativa y la libre elección de las obras. Estas cualidades suponían un atractivo para los asociados, cuyos márgenes de maniobra estaban fijados por sus propias decisiones. Asimismo, el modelo resultaba altamente conveniente para las arcas públicas, en tanto que las funciones organizativas quedaban en manos de los interesados. La Comisión, cuya burocracia era mínima, estaba a cargo de la gestión del programa y el asesoramiento, aspecto que cumplió a través del *Boletín de las Bibliotecas populares* (Planas, 2014a).

Navarrete estaba lejos de pertenecer a los sectores acomodados de la sociedad, pero un paso más delante de las clases populares. Con los primeros, percibía esa distancia en términos socioeconómicos; con los segundos, las referencias le parecían ante todo culturales. Esta posición mesocrática se deja ver en sus intereses e iniciativas. Las reuniones de lectura que organiza son un ejemplo, pero también lo son las observaciones históricas y sociológicas sobre Olta que se desprenden de su carta a la Comisión. Con claras reminiscencias sarmientinas, el paisaje social se revela ante sus ojos como una incómoda convivencia entre la presencia incipiente de los signos de modernización y la pesada herencia dejada por Facundo Quiroga y Vicente Peñaloza, quién precisamente había sido capturado, ejecutado y exhibido en la plaza pública del pueblo una década atrás. En esa tensión, se lo puede encontrar a Navarrete metido en la organización de un certamen de lectura para los alumnos de la escuela y, como veremos, cumpliendo con las diligencias para formar la biblioteca. Estas intervenciones sociales se comprenden, desde ya, en la ideología del progreso que marcó la época y a muchos de sus contemporáneos. Sin embargo, existen razones estructurales no menos atendibles que empujaron a este lector a buscar medios efectivos para la provisión de libros y otros materiales que tanto le interesaban. En el fondo de todo estaba la oficina de correos:

La dificultad grave que hai aquí es la del Correo. Yo he dejado plata al Administrador de Correos Nacionales de la Rioja para que me franquée mi correspondencia, i me la despache al Correo provincial que toca a este punto. El resultado ha sido malísimo, pues toda la correspondencia viene en un paquete al Juez de Paz, i este, no teniendo domicilio fijo, abre el paquete, i a la correspondencia particular se la lleva el diablo (...).

Hemos aquí, tres que tenemos deseos vehementes de suscribirnos á algun diario ilustrado, «La Tribuna», por ejemplo; pero por los inconvenientes que he anotado, no hemos podido hacerlo (*Boletín*, 1872, no. 3, p.215-216).

La irritación de Navarrete es visible. Los sistemas de comunicación de la Argentina distan mucho de ser eficientes. Si bien se habían alcanzado algunas mejoras sustantivas desde que el Estado puso en acto una serie de estrategias y obras orientadas a la constitución de un mercado de alcance nacional durante

la presidencia de Mitre, lo que indudablemente significaba trazar un mapa de caminos que viniera a reemplazar o mejorar las viejas arterias coloniales, las zonas marginales de la economía y los poblados rurales aún aguardaban su turno (Oszlak, 2009). Con la excepción, entonces, de las rutas aceitadas por efecto del comercio y el tránsito generado entre las ciudades más relevantes, ir a un punto del territorio relativamente modesto significaba aventurarse en una travesía de semanas y meses, de kilómetro y kilómetro sobre una huella apenas marcada por la marcha de pretéritos viajeros. En esas circunstancias, bastaba una alteración de las condiciones ambientales para postergar o entorpecer cualquier empresa: las lluvias intensas formaban verdaderos fachinales; las sequías más o menos prolongadas afectaban los ojos de agua; la creciente de un arroyo cortaba el paso o provocaba largas desviaciones. Pero las fuerzas de la naturaleza y los accidentes geográficos no eran los únicos obstáculos: una crisis política bien podía alterar los contextos de seguridad y producir los mismo efectos, cuando no situaciones más álgidas y violentas como las que propiciaban los salteadores de caminos. Frente a esta serie de eventuales contratiempos se establecieron algunas prácticas y procedimientos para sobrellevarlos. En este sentido, se comprende por qué la correspondencia de todo Olta se despachaba al juez de paz de distrito y, también, por qué el propio Navarrete en otra oportunidad solicitará expresamente que sus cartas queden en La Rioja, franqueando él mismo un comisionista particular. Con todo, las novedades que traían aquellas circulares representaban una extensión de la presencia estatal. En esas páginas la Comisión hacía saber que el proyecto que sustentaban se proponía facilitar la circulación de libros y periódicos a lo largo y ancho del territorio, en vista de las escasas librerías o almacenes de ramos generales que atendieran estas necesidades fuera de los límites de Buenos Aires y Córdoba.

La ausencia de manos privadas en el negocio libresco era perfectamente comprensible: el libro, como toda mercancía en los marcos de un sistema capitalista –o en vías de convertirse en tal cosa–, requería consolidarse como demanda. Este factor estaba limitado, en primera instancia, por el volumen de la población y la proporción de alfabetizados: el censo de 1869 registraba unos 336.000 lectores y lectoras sobre un total de 1.800.000 habitantes. En segundo término, el costo de los libros era elevado para las clases medias y

populares. Así, por ejemplo, en 1870 un volumen en rústica oscilaba entre los 20 y los 150 pesos moneda corriente (\$^{m/c}),¹ mientras que un puestero bonaerense percibía un salario de 300 a 500 pesos con casa y comida. Por supuesto, los libros no eran el único material de lectura. Ese mismo trabajador podía obtener por 10 pesos mensuales los cuatro o cinco números de *El Monitor de la Campaña*, el primer periódico impreso en el interior bonaerense. Toda esta información era bien conocida por los miembros de la Comisión, que además tenían claro que el circuito de bibliotecas de acceso público en el país estaba lejos de ser promisorio. Un exhaustivo relevamiento publicado en el primer número del *Boletín* mostraba el siguiente panorama: la ciudad de Buenos Aires estaba siendo testigo de la recomposición de su biblioteca luego de haber sido abandonada durante largos años. Paralelamente, se abrían las puertas de las bibliotecas de la Universidad, de la Facultad de Medicina y del Museo Público de Historia Nacional. En la ciudad de Córdoba, sólo se mantenía activa la Biblioteca de la Universidad. En Mendoza, el gobierno provincial estaba formando una nueva institución con los restos de la biblioteca que fundó José de San Martín en 1812 y que el terremoto de 1866 destruyó. En Santa Fe y en Corrientes se habían inaugurado bibliotecas pero poco y nada se sabía de su posterior desarrollo. A esta breve enumeración, la Comisión sumó dos casos especiales. Primero, la oficina de distribución de libros y publicaciones oficiales, que por entonces se conocía con el nombre de Biblioteca Nacional. Segundo, las bibliotecas de los Colegios Nacionales, que por una disposición de 1870 también estaban obligadas a prestar servicios al público, sin dejar de atender por ello las necesidades de los alumnos y los profesores.

Una atenta investigadora de la historia bibliotecaria argentina como Sabor Riera (1975) pudo comprobar en sus indagaciones la precisión de ese panorama y, por extensión, la pertinencia metódica del trabajo de diagnóstico realizado por los miembros de la Comisión. Este estudio no sólo venía a demostrar la escasa presencia territorial de las bibliotecas –una dimensión puramente cuantitativa–; también presentaba una valoración crítica de los servicios al constatar la permanencia de dos viejas prácticas institucionales: la prohibición del préstamo domiciliario de libros y la utilización de horarios de apertura poco

¹ En adelante, utilizaremos el Peso Moneda Corriente como referencia, aun cuando en los documentos los valores pueden estar en Pesos Fuertes (en este caso, la relación es de 1 \$f a 25\$^{m/c}).

convenientes para el público. Estas condiciones, a las que indefectiblemente se le sumaba la selectividad del material que componían las colecciones, determinaban una potente conclusión: las bibliotecas existentes sólo atendían a una élite de lectores ciudadanos. Remediar esta situación mediante una apelación directa a la sociedad civil suponía un riesgo, puesto que en el mismo relevamiento bibliotecario sólo se registraban cuatro experiencias asociativas previas a la legislación de 1870. La primera de ellas remitía a San Fernando, aunque en rigor se trataba de una biblioteca que nunca llegó a fundarse –lo que contaba como antecedente era la publicación de un reglamento provisional en la revista *Anales de la Educación Común* de junio de 1861. La segunda iniciativa estuvo a cargo de Juana Manso durante su estancia en Chivilcoy, aunque la aventura bibliotecaria apenas duró los meses que se extienden entre la primavera 1866 y el otoño de 1867. Finalmente, las únicas bibliotecas que habían conseguido cierta regularidad eran la de San Juan, sostenida por una Sociedad Auxiliar presidida por Damián Hudson y alentada por Pedro Quiroga, y la que mantenía la Sociedad Tipográfica Bonaerense para sus socios.

El cuadro precedente no admite muchas objeciones si se excluye como criterio de categorización las colecciones de libros que debieron circular entre los grupos de amigos y colegas de cualquier entidad o club social. En diciembre de 1871 las dudas existentes sobre el programa que se proponía la Comisión comenzaron a despejarse. El *Boletín* traía entre sus novedades la aparición de nuevas bibliotecas populares: en Buenos Aires, en los pueblos de Chivilcoy, Cañuelas y Exaltación de la Cruz; en el interior, en las ciudades de San Juan, Mendoza, Tucumán, Salta, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis y Catamarca. Durante 1872 y 1873 tendrá lugar una proliferación explosiva de estos establecimientos, llegándose a contabilizar la formación y subvención de un centenar de instituciones distribuidas por la extensa geografía argentina. Historias como las de Navarrete estaban latentes en todas partes.

La biblioteca del pago

Mientras nuestro lector se imaginaba al frente de una biblioteca, aún sin contar con más información que las noticias que tenía por aquellas circulares, otro vecino de Olta pergeñaba idénticos planes. Se trata de Martín Gelos, que por intermedio del cura párroco tuvo acceso a la publicación de la Comisión a los pocos meses de haber salido el primer número. No era casual que el sacerdote

tuviera un ejemplar: la primera edición había sido distribuida selectivamente entre las personalidades más influyentes de cada pueblo y ciudad. Así, enterados por distintas vías, ambos lectores anduvieron en los mismos asuntos sin saber nada de la conexión que les esperaba. Previsiblemente este estado de cosas no podía durar demasiado tiempo en la comunidad. Y en uno de esos días en que la llegada del correo todo lo cambia, Gelos supo que en la correspondencia despachada para Olta iban dos ejemplares del *Boletín* para Navarrete. En ese punto los protagonistas empiezan una historia de lecturas y actividades: primero se reúnen y cambian ideas sobre los conceptos y las recomendaciones que difunde la Comisión; después llega el momento de la acción: sumar voluntades. Si las conversaciones que mantienen los llenan de entusiasmo y los compromete a seguir avanzando con el proyecto, encontrar otros lectores es una tarea que no les resulta del todo grata. La posición mesocrática que ocupan en el orden jerárquico de la sociedad riojana los ayuda a ubicar a personas con las que comparten cierta cosmovisión, entre cuyos valores se destacan la creencia según la cual la lectura hace mejores a los individuos y, por lo mismo, contribuye a la constitución de una sociedad armónica. No obstante, el dispositivo de persuasión del que disponen no resulta del todo efectivo al momento de trazar vínculos con aquellos sectores que se mantienen a distancia de su propio espacio. Con los de abajo, es el sistema de juicios que nutre su reflexión el que los aleja:

Estas dificultades [que encontramos al momento de sumar seguidores] no provenían tanto de la falta de recursos materiales de los habitantes, cuanto de la total ignorancia de ellos, que no todos conocen las ventajas que ofrece la lectura, i aún se oponen muchos padres de familia á permitir que sus hijos se eduquen en las Escuelas (*Boletín*, 1872, no. 3, p. 218).

Probablemente Navarrete y Gelos han construido esa idea entre las vivencias cotidianas y las lecturas que han logrado hacer con el paso de los años. Son estas mismas lecturas las que ayudaron a formar ese sentimiento cuasi pastoral modelado en la ideología del progreso que los empuja hacia la búsqueda de un público más allá de sus límites de clase y, tal vez, más allá de lo que ellos mismos pueden hacer. Como en tantos otros casos, el dilema se resuelve de forma operativa. Y en este punto los convencidos resultan ser los

más fáciles de convencer. Durante nueve meses nuestros lectores apelaron a sus redes de contactos y afinidades hasta que creyeron consolidar un cuerpo inicial de socios lo suficientemente sólido como para hacer viable el proyecto. Con las diecinueve personas que pudieron reunir conversaron sobre los deseos y las ilusiones del porvenir; pero sobre todo hablaron de las cosas que debían hacer. Entre ellas, cada uno de los pormenores que requería hacerse de la subvención que estipulaba el Estado. Para diciembre de 1872 habían logrado constituir la sociedad, asignar las responsabilidades dirigenciales y juntar un total de 2.225 \$^{m/c}. Cada asociado contribuyó con lo que consideraba apropiado entre la expectativa que generaba la empresa y la disponibilidad de su bolsillo. Estas razones brindan sentido a las diferencias existentes entre los aportes recolectados, que oscilan entre los 25 y los 250 pesos. Por delante quedaba escribir los estatutos de la institución, reglamentar el uso de la biblioteca, escoger las obras que llenarían los estantes y enviar todo a la Comisión. Pero estas últimas tareas se demoraron algunos meses en vista de las posibilidades que la sociedad barajaba para duplicar la recaudación inaugural, ya que la suma alcanzada les parecía algo modesta en función de los esfuerzos realizados. El plan que tenían entre manos no era ni sutil ni original: la ayuda la buscarían entre los sectores acomodados e influyentes de la sociedad riojana. Un tiempo después, Navarrete cuenta desencantado los resultados de esta apuesta:

Nos hemos dirigido al Gobierno de la Rioja; al Sr. Inspector General de Escuelas; á los curas, y en fin á todos los hombres que algo valen por su posición ó bien estar [sic.], pero todo ha sido en balde y aun parece que miran como una usurpacion que se le quiere hacer á la Aristocracia (*Boletín*, 1873, no. 4, p. 40).

Apelar a las élites locales era una idea de la Comisión, alentada mediante la distribución selectiva del *Boletín* –tal como hemos indicado–, a través de los vínculos políticos y partidarios o, simplemente, en los consejos que se daban a los lectores. La estrategia se basaba en un razonamiento relativamente sencillo: en un contexto marcado por los altos niveles de analfabetismo, quienes dispusieran de mayores cuotas de capital cultural estaría en mejores condiciones de montar una biblioteca. Los resultados prácticos fueron dispares. En Olta, como

se apreciaba en la cita, la clase dirigente se mantuvo al margen del proyecto, tal vez amparándose en los mismos supuestos y prejuicios que nuestros lectores mantenían respecto de los sectores que les eran subalternos. Pero justamente desde estos espacios proviene el último auxilio que tendrán:

La pequeña suma que hemos colectado es el óbolo del pobre que sin comprender bien su objeto pero diciéndoles que es para beneficio de sus hijos: ¡Oh! sí dicen, siendo para que mis hijos sean mas felices que nosotros, lo haremos con gusto (*Boletín*, 1873, no. 4, p. 40).

Es notable la diferencia entre estos padres y aquellos que se resistían a que sus hijos asistieran a la escuela. Presumiblemente, ambos grupos formaban parte de los mismos espacios socioeconómicos que nuestro cronista enmarca dentro de los sectores populares. No obstante, la distancia cultural entre unos y otros –o la sola idea de un futuro familiar distinto– marcaba la diferencia entre participar o no de la asociación que se estaba gestando. Con el ingreso de más abonados la recaudación inicial trepó a 3.000 \$^{m/c} y, sin otras cartas por jugar, la flamante asociación ordenó los estatus, definió los reglamentos y organizó una lista de libros, aunque dejó margen para que la propia Comisión completara la nómina según creyera conveniente. Si bien los responsables del *Boletín* especificaron en más de una oportunidad que su voluntad era contraria a esta tarea, Navarrete explicó que esa situación se produjo por un desacuerdo que mantuvo con sus pares. Con todo la dinámica asociativa gestada en torno a las bibliotecas populares como espacios de discusión de lecturas estaba en marcha. Para abril de 1873 las gestiones iban mejor de lo que en algún momento los lectores pudieron especular: el gobierno nacional, además de la protección habitual, decidió conceder una bonificación especial de 6.250\$^{m/c}, alegando que este importe venía a sustituir lo que el Estado rioplatense no podía o se negaba a conceder. En el medio de estas rencillas políticas, lo cierto es que entrar en Olta con las herramientas de la civilización era darle a la administración de Sarmiento un triunfo simbólico significativo.

Sabemos que la biblioteca popular “Sarmiento” –este fue el nombre que escogieron sus fundadores– comenzó a funcionar en agosto de 1873 con una colección estimada en 324 libros. Un número para nada despreciable si se piensa en el punto de partida de toda esta historia. La piecita que construyó

Navarrete –o cualquier sitio donde finalmente se haya emplazado el establecimiento– albergó a 24 lectores durante ese mes. Luego la cifra subiría progresivamente: 60 en septiembre, 77 en octubre, 79 en noviembre y 94 en diciembre. Los pedidos a domicilio fueron en ascenso, sumando 130 para todo el semestre. Durante 1874 la vida en la biblioteca seguía siendo promisoria: los 764 lectores en la sala y los 249 préstamos a domicilio así lo indicaban. Los datos, que por lo demás son extraordinarios, están en sintonía con el resto de las bibliotecas. Los documentos de la Comisión informan de este proceso. En la quinta entrega del *Boletín* (1874) se publican las estadísticas de 35 bibliotecas populares de las 91 subvencionadas. Según las planillas, entre los meses de enero y diciembre habían asistido a las salas de lectura un total de 17.970 lectores, mientras que los pedidos de libros a domicilio ascendían a 17.035. A partir de esta estadística se deduce que cada biblioteca fue visitada 26 veces por mes (312 al año) y, durante el mismo lapso de tiempo, se retiraron 24 libros (288 en el año). Estos datos se confirman proporcionalmente para las 67 bibliotecas que enviaron los registros correspondientes al año 1874 (*Boletín*, 1875, no. 6). Si bien entendemos que las metodologías empleadas para tomar estas cifras fueron diferentes (un asistente puede ser una persona que estuvo leyendo durante algún tiempo en la sala o, simplemente, alguien que cruzó la puerta de la biblioteca), en general los guarismos resultan confiables si se toma como punto de comparación los 48.000 ejemplares que *El gaucho Martín Fierro* alcanzó en el transcurso de los 6 años posteriores a su aparición en 1872 (Prieto, 2006). Esto significa que el best-seller de la literatura nacional se vendió a razón de 8.000 ejemplares por año. Con todo, se trata de las primeras objetivaciones de la emergencia progresiva de un amplio público lector y, en términos específicos, de la existencia de un lectorado para las bibliotecas populares.

Un lugar y un espacio para la literatura

Al volver la mirada a la situación bibliotecaria descripta precedentemente queda claro que no existía una cultura que uniera al público con estas instituciones, una diferencia sustancial si se piensa en la tradición norteamericana. Allí la intervención de Benjamín Franklin a favor de la participación comunitaria en la constitución de los espacios públicos de lectura resultó decisiva, aunque la expansión efectiva de estos lugares debe ubicarse en los usos y las costumbres sociales que los clubes de lectura ingleses habían propiciado, por

una parte, y, por otra, a la tarea de difusión que muchos educadores emprendieron junto al Estado en las primeras décadas del siglo XIX. Entre estos últimos cabe consignar la participación de Horace Mann, de quién Sarmiento recuperó una parte importante de los fundamentos que culminarían dando forma a la ley de subvenciones en 1870. Este contraste histórico revela una dificultad: los lectores reunidos para fomentar el desarrollo de las bibliotecas populares y los responsables de la Comisión se encontraban en condiciones bibliotecológicas semejantes, aunque con grados de responsabilidad muy diferentes.

En este contexto, el *Boletín* funcionó como un instrumento de comunicación cuyo principal objetivo fue favorecer el desenvolvimiento de las bibliotecas a partir de la difusión periódica de modelos reglamentarios, catálogos de obras disponibles en las librerías porteñas y todo tipo de aporte que se considerara apropiado. Así fue que la Comisión consolidó un espacio editorial donde registró los diferentes estados de avance del programa, con la particular inclusión de los envíos postales de los lectores. En esta sección se pueden leer historias mínimas sobre los procesos de fundación de las bibliotecas –como la de Navarrete–, algunas memorias de gestión de los establecimientos, los reglamentos adoptados para su funcionamiento y las consultas más diversas. Esta apelación constante a los registros documentales producidos por los lectores hace que la revista no sea simplemente un testimonio de la estrategia desplegada por un órgano burocrático singular, sino también el escenario de las diferentes apropiaciones tácticas por parte de los organizadores locales de las bibliotecas. Esta distinción, que apela a los términos clásicos utilizados por Michel de Certeau (2000), apunta a subrayar el predominio institucional e ideológico de la Comisión, a la vez que procura indicar la existencia de diversas maneras de hacer uso de una política preestablecida. De modo que el *Boletín* es una publicación que contiene una dinámica que entrecruza las posiciones de la Comisión y la que sustentan los lectores, generando significaciones que desbordan los límites usualmente trazados para los textos normativos o instructivos.

Bajo este modelo de producción del saber se formó un primer y amplio repertorio de textos bibliotecarios, previsiblemente, la mayoría luego de la primera entrega del *Boletín*. Una fracción de estos materiales fue publicada por las propias asociaciones en folletos de unas pocas páginas y baja tirada, con la intención de poner al corriente de los socios la marcha de la administración y,

desde ya, publicitar los servicios de la biblioteca en la comunidad. Memorias de gestión, estatutos, reglamentos, catálogos, avisos especiales, actas inaugurales, discursos de ocasión, conferencias literarias; todo forma parte de los vestigios que fueron dejando en el tiempo los asociados. El mérito de la Comisión fue incluir entre las páginas de su revista algunos de estos trabajos, de manera que cualquier otra persona a la distancia pudiera darse una idea de las tareas comprometidas con el montaje de una biblioteca, por más modesta que fueran sus dimensiones. Lamentablemente no podemos saber cómo lo hicieron Navarrete y Gelos una vez que recibieron el cajón de libros procedente de Buenos Aires, pero podemos imaginarlo dando un vistazo a esa serie de documentos.

Allende las cuestiones estrictamente simbólicas, es decir, las que están vinculadas a la representación del buen porvenir, a la búsqueda de un reposicionamiento social o al uso del tiempo libre asociado a una actividad de prestigio como la lectura, cualquier movimiento bibliotecario exige la consumición de algún tipo de recurso, sea dinero o tiempo (que también es dinero). Por lo tanto, la misión que cada asociación tenía por delante era, paradójicamente, armar un negocio sin fines de lucro. Nuestros lectores pudieron formarse una vaga idea de lo que esto significaba en las alusiones que los estatutos publicados en los primeros números del *Boletín* traían sobre la responsabilidad contable de las instituciones. Sin embargo, no hubo en esas entregas ni en las siguientes indicaciones técnicas de ningún tipo. De manera que, en la práctica, los asociados transfirieron su experiencia en el comercio de bienes al ámbito bibliotecario –una situación que, sin dudas, propició la procedencia de clase de estos actores. En Bella Vista, por ejemplo, el responsable de atender esta necesidad en la biblioteca de la localidad entre 1873 y 1876 elaboró una *Memoria* en la que se detallan todos y cada uno de los ingresos y los egresados. A través del complejo dispositivo administrativo podemos visualizar los requisitos comprometidos en la conversión de una habitación cualquiera en un lugar de lectura: dos estantes de pino para los libros, un escritorio de cedro para el bibliotecario, una mesa chica y otra grande para los lectores, doce sillas de esterillas, dos lámparas y un reloj de pared. Otras cosas menores son igualmente importantes para la administración y los usuarios: tijeras, resmas de papel oficio y carta, libros en blanco de contabilidad, tinta, pluma, lápices y lapiceras, goma arábica, papel secante, sobres y algunos

utensilios de cocina como vasos de vidrio, una botella de barro, una tinaja y un plato. Finalmente, para que este conjunto de muebles y útiles funcione todavía se precisa invertir un poco más de dinero: un sueldo de bibliotecario para mantener el local abierto algunas horas a la semana; kerosene y mecha para las lámparas; varios artículos de limpieza y, en ocasiones, algún servicio de reparación. No todas las bibliotecas populares son tan exhaustivas en sus balances como la de Bella Vista, pero los rótulos utilizados en su contabilidad son lo suficientemente claros como para permitirnos sostener que el conjunto de dirigentes que las administró debió cubrir una serie de necesidades semejantes, aun cuando las posibilidades materiales representaron un límite infranqueable para sus pretensiones. En suma, la extensa serie de objetos adquiridos por las bibliotecas y asentados en estos documentos nos ayudan a conformar una idea de lugar (de Certeau, 2000), esto es, el ordenamiento físico y estructurante de los elementos en una locación singular. En la naturaleza misma de estos elementos también se pueden comenzar a dilucidar las operaciones y las dinámicas que lo orientan y lo temporizan, haciendo del lugar un espacio de lectura (o lo que es lo mismo decir: un lugar practicado).

Queda claro, entonces, que montar el lugar y conferirle un principio de funcionalidad implica administrar el dinero en relación a un conjunto de necesidades y un sentido institucional. Estos gastos son, por los demás, dinámicos. Durante los períodos fundacionales las bibliotecas invirtieron en mobiliario prácticamente lo mismo que destinaron para la adquisición de obras. En los balances ordinarios, en cambio, los egresos son diferentes: el servicio bibliotecario oscila entre el 25 y el 30%; la compra de libros, por lejos el rubro más oneroso, se mueve entre el 40 y el 60%; los costos restantes se reparten entre alquiler (20%), útiles (10%) y otras erogaciones ocasionales, como las contrataciones en carpintería, imprenta o encuadernación. Las fluctuaciones en estas últimas categorías suelen ser importantes de un ejercicio a otro, pues los requerimientos y los fondos con los que se atienden son variables.

Toda esta maquinaria institucional, que estaba fuera de la cobertura estatal, puso a prueba la astucia de los asociados para reunir efectivo, regatear precios y obtener favores. Y ya vimos las serias dificultades que tuvieron los lectores de Olta para ganarse alguna simpatía más allá de su propio círculo social, una cuestión decisiva en los poblados del interior. En otras bibliotecas la suerte fue distinta: dirigentes pudientes y voluntariosos llegaron a donar

la cuota regular de un año entero en un solo pago con tal de agilizar las compras y reanimar la vida de la institución. Hubo ocasiones en las que la procedencia social de prestigio de los asociados sirvió para gestionar campañas de solidaridad, tal como los espectáculos a beneficio que la Biblioteca Popular de Chascomús obtuvo de la Compañía Ecuestre de la localidad. Con el andar regular, las asociaciones pudieron implementar métodos de recaudación adicionales, como el cobro de multas por las demoras en la devolución del material y los alquileres y las ventas de libros. En el primer caso, en general, resultaron ser aportes insignificantes, pues las sanciones utilizadas eran más bien simbólicas. Las otras prácticas alcanzaron cierta relevancia: los alquileres, como una modalidad diferencial de préstamo para aquellos lectores que no estaban dispuestos a pagar una tasa mensual; las ventas, como un medio por el cual las bibliotecas cumplieron funciones de librería y, con ello, favorecieron el recambio del acervo bibliográfico. En la asociación de Bella Vista este último mecanismo fue implementado con naturalidad entre los dirigentes, quienes en algunos casos llegaron a comprar hasta 70 obras en poco menos de tres años.

En conjunto, las estrategias precedentes funcionaron de modo parcial y con distinta suerte. Los aportes sustantivos hay que localizarlos, primero, en las subvenciones estatales, que significaron un estímulo imprescindible para renovar las colecciones y alentar la participación civil. No obstante, estos aportes pronto se desvanecieron en los avatares traumáticos que deparó el proceso de institución del Estado argentino en la segunda mitad del siglo XIX. En particular, la clase política no logró resistir la tentación de echar mano a los fondos destinados a estas instituciones entre otras tantas medidas de ajuste implementadas en la presidencia de Nicolás Avellaneda para afrontar los efectos de la crisis financiera internacional de 1873/76 (Chiaromonte, 1986). Por esta razón, la piedra angular de las bibliotecas populares siempre fue la solidaridad asociativa, ya sea para generar una renta regular mensual como para favorecer el recambio dirigencial y la afluencia de público. Mientras así lo hicieron, gozaron de buena salud. Pero, como toda institución fundada en el asociacionismo, las bibliotecas no escaparon a la dinámica zigzagueante que caracteriza a estas iniciativas: comienzos efusivos, años regulares, decaimientos progresivos, cierres temporarios, reinicios promisorios (Di Stefano, et. al. 2002; González Bernaldo, 2008). Muchas de las *Memorias* citadas y otras que pudiéramos mencionar informan de una preocupación constante por el decaimiento de la actividad. Las

razones que se utilizan para explicar el fenómeno son diversas, pero fundamentalmente obedecen a dos lógicas: de un lado, los avatares coyunturales, entre los que se destaca la citada quita de las subvenciones y la conflictividad política nacional; de otro, el agotamiento de la institución, tangible en el desinterés del lectorado y el abandono paulatino de la empresa. Este distanciamiento, al margen de los dilemas circunstanciales que corresponden en cada caso, debe buscarse en la estructura regimentada que exige la participación y el uso de estas organizaciones. El aporte monetario es una faceta insoslayable cuando se trata de sectores medios y populares, pero aún lo es más su carácter ordinario. Porque lo rutinario es la norma de la biblioteca pero no la que gobierna los impulsos y las prácticas de los lectores. Ser un socio estable significa abonar todos los meses una cuota. Es caminar hasta la institución a buscar un libro y tener la fortuna de ubicarlo. Es regresar al hogar sabiendo que 10 días después hay que devolverlo en las mismas condiciones, porque de lo contrario corren las multas y los sermones del bibliotecario. Es recomenzar el ciclo con la renovación del préstamo o con el pedido de una obra diferente. Implica perder las ganas de leer o que falte el tiempo para hacerlo y mantener sin embargo la obediencia de seguir aportando, porque si no te expulsan o te declaran moroso. También demanda participar en las asambleas o sentir la responsabilidad por ausentarse. Es, en definitiva, hacerse un poco a la medida de la biblioteca y sus rituales.

La instalación del lugar y las reglas de uso son el efecto de una representación bibliotecaria inscrita en el imaginario de los responsables de organizar las bibliotecas populares. Esa figura fue tallada en el *Boletín*, en el marco de esa fértil combinación que se produjo entre las disposiciones fijadas por la Comisión y los rumbos más o menos originales que siguieron los lectores. Probablemente, el ideal de todo asociado hubiera estado muy cerca del siguiente relato:

La Biblioteca ocupa dos salas, de 7 1/3 varas de largo y 6 1/4 de ancho, cada una, perfectamente aseadas, claras, etc. En la segunda, que es la destinada á los libros, hay cuatro estantes de 4 1/4 varas de alto, por 2 3/4 de ancho. La Biblioteca está organizada en cuatro secciones para los libros. Las tres primeras para los encuadernados, en pasta, tela, etc. y la cuarta para los á la rústica.

Cada libro, folleto, etc., tiene el número de la sección y el que en ella le corresponde, en su colocación; el precio de la obra y el sello de la Biblioteca, cada sección, con cierre de cristales, admite de quinientos a ochocientos volúmenes, según el tamaño.

Debajo de cada sección, hay otras dos, con puertas, destinadas para mapas y otros objetos de estudio e instrucción. De modo que los cuatro grandes estantes, forman doce secciones. Entre cada sección alta y baja, hay una tabla o mesa corrediza para colocar libros u otros objetos, provisoriamente. En esta sala que es donde tiene su mesa escritorio el Intendente, con todos los libros y útiles para el buen desempeño de su encargo, hay también una mesa grande con carpeta fina, en cuyo centro está colocada una estatua de Benjamin Franklin (...). Las paredes están vestidas con mapas, cuadros, etc. hay un lavatorio, sillas y todos los útiles de aseo.

La primera sala, destinada para lectura, tiene en el centro una gran mesa y sobre ella colocado un magnífico busto de Guttemberg, y puesto sobre una columna circundada de pequeños bustos de los escritores más notables del mundo. Un doble tintero de cristal con un busto de bronce, y el todo sobre el mármol negro bruñido. En rededor de la mesa están colocados varios periódicos ilustrados y algunos de los diarios que se publican en Buenos Aires (*Boletín*, 1874, no. 5, p. 151-152).

El fragmento forma parte de una descripción más extensa que Juan Madero elaboró de la Biblioteca de San Fernando en 1874, a pocos meses de su inauguración. Todo tiene las apetencias burguesas: la amplitud de las salas, los estantes vidriados, los cuadros en las paredes, el diario sobre la mesa, los bustos que conmemoran a los héroes de la modernidad y los libros en perfecto orden. Este horizonte, sin embargo, quedó demasiado lejos de las posibilidades materiales de la mayoría de los lectores que se embarcaron en la misma empresa en otros puntos del territorio –y en San Fernando, quizá, a distancia de ese público popular al que tan afanosamente se consagraron los discursos sobre la instrucción pública. Navarrete, Gelos y sus colegas pusieron todo el empeño que les fue posible durante un año, y sin la ayuda estatal, no hubieran comprado más que un centenar y medio de libros. Pero la esencia del trabajo fue la misma. Donde existieron las salas de lectura se requirieron estantes,

mesas, sillas y útiles, además de los servicios de limpieza, reparación y otras atenciones por el estilo. En ocasiones, estas demandas fueron cubiertas por los propios interesados, en otras se contrataron de forma directa o por licitación —los periódicos locales son testimonios de estos pedidos. Lo que no faltó en ninguna parte fue el quehacer bibliotecario, en sus diferentes niveles de complejidad e improvisación. La actuación de las reglas del orden hizo posible la formación de los espacios de lectura y, desde ya, las transgresiones que vinieron después.

Los varios reglamentos publicados en el *Boletín* y los muchos que circularon impresos brindaron un marco de referencia para ordenar las bibliotecas a través de las obligaciones conferidas a los bibliotecarios. En una apretada síntesis, el trabajo consistía en amar el catálogo, llevar los libros de préstamo, reservas y sanciones, confeccionar las estadísticas de circulación, mantener los estantes en orden, cuidar el comportamiento de los lectores en la sala de lectura, atender al público, recaudar las entradas de dinero por préstamos y multas, anotar los pedidos de compras y, finalmente, limpiar el local. Algunos documentos traen precisiones en lo que respecta a los deberes bibliográficos. Y estas instrucciones serán fundamentales, puesto que la Comisión jamás proporcionó una guía con explicaciones técnicas al respecto. Por lo tanto, en la práctica proliferaron distintos usos, desde las aplicaciones ortodoxas hasta las combinaciones más heterodoxas (Planas, 2014b).

En la biblioteca de Olta este trabajo debió ser algo denso para Navarrete y Gelos, que no sólo estaban lejos de manejar el arte bibliotecario, sino que jamás habían sido usuarios. Pero hemos constatado que fueron lectores atentos del *Boletín*. En este sentido, no habrán dejado de percibir que el catálogo era una pieza clave en este universo. Y que más allá de las diferentes formas empleadas para organizarlo, todas lo concebían como un inventario de las obras disponibles en la institución, pero que a diferencia de las listas que ofrecían las librerías, también se trataba de un mapa para encontrarlas. Aprendida esta lección primordial, y una vez que los libros estuvieron fuera de los cajones de embalaje, el desafío fue ponerlos en orden —que es, después de todo, el sueño que alimenta la vida de estos establecimientos. Una opción era ubicarlos por tamaño: de menor a mayor, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, de modo que los volúmenes grandes quedaran en los estantes más cercanos al piso. Otro modo de hacerlo consistía en colocarlos por orden alfabético

tomando como referencia el título: desde la “A” en la parte superior izquierda hasta la “Z” en la inferior derecha. Finalmente, las obras pudieron ser distribuidas conforme a grandes áreas temáticas, una opción frecuente entre las bibliotecas populares. Para una clasificación bastaba con ojear la primera entrega del *Boletín*, en la que se incluía una grilla de títulos agrupados de la siguiente manera: filosofía; ciencias y sus aplicaciones a las industrias; derecho, ciencia política, economía social y política; historia, geografía y viajes; literatura; educación; religión. Desde una serie ideal como ésta hasta su uso concreto mediaba un proceso de apropiación en el que la calidad del material incorporado por la institución determinaba qué categorías utilizar. Así, por ejemplo, en algunas bibliotecas sólo bastaron unas pocas clases: ciencias y artes; historia y geografía; novelas; documentos oficiales. Si Navarrete y Gelos decidieron reunir los libros siguiendo una taxonomía como ésta última, su trabajo requirió, primero, examinar cada uno de los textos e identificar el contenido, para lo cual debieron valerse de los títulos, los índices, los prólogos y las introducciones –que son buenas compañeras para no poner *Vente mil leguas de viaje submarino* junto a las obras de viaje. Luego, distribuir los volúmenes clasificados en los estantes y, una vez completadas las cuatro secciones, asignar las etiquetas de referencia con el nombre y un número romano, por caso: “I-ciencias y artes”. Seguidamente, registrar en un cuaderno preparado con esas mismas divisiones los datos catalográficos de cada uno de los libros, esto es: autor, título, lugar y fecha de publicación, editor, descripción física. Por último, individualizar el lugar exacto de cada texto mediante la asignación de un código compuesto por la identificación temática y número arábigo, algo así como: “I-5”. Con esta información, armar las etiquetas, pegarlas en los volúmenes y anotar lo mismo en el catálogo. Al cabo de un tiempo esta misión está cumplida. Darle sentido a este orden implicaba, además, confeccionar el libro de préstamos, con las áreas necesarias para apuntar la identidad del lector (nombre y apellido, domicilio), la obra en cuestión (autor y título), las fechas de entrega y devolución, el precio del ítem y las observaciones. Y si el tiempo y el ánimo ayudaban, también se podían producir algunos instrumentos complementarios: una libreta de reservas y otra de multas, una planilla estadística para la circulación y un listado alfabético de los títulos disponibles para auxiliar las búsquedas.

Después de todo ese periplo y todas esas actividades un buen día se inaugura la biblioteca con una gran celebración. Y a la mañana siguiente llegan los lectores, a quienes hay que enseñarles a utilizar las instalaciones, a usar los libros, a comprender, en definitiva, esas normas rutinarias. En ello va la formación del lugar y del espacio para la literatura que propusieron las bibliotecas populares. A partir de allí comienzan otras historias de la lectura que, como las de Navarrete, combinaron el ejercicio de la imaginación con la agitación en la vida cotidiana.

Bibliografía

- Certeau, M. (2000) [1990]. *La invención de lo cotidiano*. México: Departamento de Historia-Universidad Iberoamericana.
- Chiaromonte, J. C. (1986). *Nacionalismo y liberalismo económico en la Argentina, 1860-1880*. Buenos Aires: Hyspamérica.
- Darnton, R. (2010). *El beso de Lamourette: reflexiones sobre historia cultural*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Di Stefano, R., Sábato, H., Romero L. A., y Moreno, J. L. (2002). *De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en la argentina (1776-1990)*. Buenos Aires: Edibal.
- González Bernaldo, P. (2008) [1999]. *Civilidad y Política en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Oszlak, O. (2009) [1982]. *La formación del Estado argentino: orden, progreso y organización nacional*. Buenos Aires: EMECÉ.
- Planas, J. (2014a). Las bibliotecas populares en la Argentina entre 1870 y 1875. La construcción de una política bibliotecaria. *Informatio*, 1(18), 66-88. Recuperado de: <http://informatio.eubca.edu.uy/ojs/index.php/Infor/article/view/152/229>
- Planas, J. (2014b). Hacer las reglas del hacer: concepciones y rutinas en los reglamentos de las bibliotecas populares en la Argentina (1870-1875). *Revista de Historia Regional*, 1(19), 203-226. Recuperado de: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/viewFile/6117/4095>
- Prieto, A. (2006) [1988]. *El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Sabor Riera, M. Á. (1975). *Contribución al estudio histórico del desarrollo de los*

servicios bibliotecarios de la Argentina en el siglo XIX. Tomo II. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste, Dirección de Bibliotecas.

Fuentes

Biblioteca Popular de Bella Vista (1877). *Memoria de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular de Bella Vista. Presentada a la asamblea general de socios el día 4 de febrero de 1877.* Buenos Aires: Courier de la Plata.

Biblioteca Popular de Chascomús (1873). *Boletín de la Biblioteca Popular de Chascomús.* Buenos Aires: Imprenta Rural.

Boletín de las Bibliotecas Populares (1872-1875). Buenos Aires: Imprenta Americana.